

El proyecto remitido tiene por objeto regular las comunicaciones de emergencia para acceder a los servicios de emergencia a través del número único europeo 112, procediendo al desarrollo reglamentario de las previsiones contenidas en el artículo 74 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones:

**Artículo 74. Comunicaciones de emergencia y número de emergencia 112.**

*1. Los usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración, cuando dichos servicios permitan realizar llamadas a un número de un plan de numeración nacional o internacional, incluidos los usuarios de los teléfonos públicos de pago, tienen derecho a acceder de manera gratuita, sin contraprestación económica de ningún tipo y sin tener que utilizar ningún medio de pago a los servicios de emergencia a través de comunicaciones de emergencia utilizando el número de emergencia 112 y otros números de emergencia que se determinen mediante real decreto.*

*En todo caso, el servicio de comunicaciones de emergencia será gratuito para los usuarios y para las autoridades receptoras de dichas comunicaciones de emergencia, cualquiera que sea la Administración Pública responsable de su prestación y con independencia del tipo de terminal que se utilice.*

*2. Los operadores de servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración, cuando dichos servicios permitan realizar llamadas a un número de un plan de numeración nacional o internacional, tienen la obligación de encaminar gratuitamente las comunicaciones de emergencia a los servicios de emergencia cuando se utilice el número de emergencia 112 u otros números de emergencia que se determinen.*

*Asimismo, los operadores citados pondrán a disposición de las autoridades receptoras de dichas comunicaciones de emergencia la información que mediante real decreto se determine relativa a la ubicación de las personas que efectúan la comunicación de emergencia, inmediatamente después del establecimiento de dicha comunicación. La generación y transmisión de la información relativa a la localización del llamante es gratuita tanto para el llamante como para las autoridades receptoras de dichas comunicaciones de emergencia cuando se utilice*

*el número de emergencia 112 u otros números de emergencia que se determinen.*

*Mediante real decreto se establecerán criterios para la precisión y la fiabilidad de la información facilitada sobre la ubicación de las personas que efectúan comunicaciones de emergencia a los servicios de emergencia.*

*La información relativa a la ubicación de las personas que efectúan la comunicación de emergencia únicamente podrá ser utilizada con la finalidad de facilitar la localización del llamante en relación con la concreta llamada de emergencia realizada.*

*3. El acceso a los servicios de emergencia a través de comunicaciones de emergencia para los usuarios finales con discapacidad será equivalente al que disfrutaban otros usuarios finales. Mediante real decreto, oído en todo caso el Consejo Nacional de la Discapacidad, se establecerán las medidas adecuadas para garantizar que, en sus desplazamientos a otro Estado miembro de la Unión Europea, los usuarios finales con discapacidad puedan acceder a los servicios de emergencia en igualdad de condiciones que el resto de los usuarios finales y, si fuera factible, sin necesidad de registro previo. Estas medidas procurarán garantizar la interoperabilidad entre los Estados miembros y se basarán en la mayor medida posible en las normas o las especificaciones europeas pertinentes.*

*4. Las autoridades responsables de la prestación de los servicios de emergencia velarán por que los ciudadanos reciban una información adecuada sobre la existencia y utilización del número de emergencia 112, así como sus características de accesibilidad, y en particular, mediante iniciativas específicamente dirigidas a las personas que viajen a otros Estados miembros de la Unión Europea y a los usuarios finales con discapacidad.*

*5. Se promoverá el acceso a los servicios de emergencia a través del número de emergencia 112 y otros números de emergencia desde redes de comunicaciones electrónicas que no sean accesibles al público pero que permitan realizar llamadas a redes públicas, en concreto cuando la empresa responsable de dicha red no proporcione un acceso alternativo y sencillo a un servicio de emergencia.*

*6. Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, a las comunicaciones de emergencia les será de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo.*

A este respecto, y siguiendo las observaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el texto remitido procede a una regulación sistemática de los aspectos relevantes de los

servicios de emergencia incorporando y actualizando la regulación contenida en el Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso mediante redes de telecomunicaciones al servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112, en la Orden de 14 de octubre de 1999 sobre condiciones de suministro de información relevante para la prestación del servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número 112 y en la Orden ITC/750/2010, de 17 de marzo, por la que se establecen las condiciones para la puesta a disposición de los datos de localización del usuario llamante del servicio telefónico móvil a los servicios de atención de llamadas de emergencia prestados a través de los números 062 y 091, procediendo a la derogación expresa de estas normas.

Asimismo, tal y como se destaca en la Exposición de Motivos y en la Memoria de análisis de impacto normativo (MAIN), uno de los principales objetivos de esta disposición normativa es el de mejorar la información sobre la ubicación del llamante, incorporando la facilidad conocida como AML por sus siglas en inglés (“Advance Mobile Location”), que permite proporcionar a los servicios de emergencia información más precisa relativa a la ubicación basada en el terminal móvil del llamante.

Por otro lado, en el texto remitido se introducen determinadas garantías dirigidas a la protección del derecho fundamental a la protección de datos personales, señalando en su Exposición de Motivos que *“el real decreto aborda la cuestión, de creciente relevancia por el uso cada vez más masivo y generalizado de información personal, del uso adecuado de los datos personales y la garantía de su protección, a la hora de proporcionar los servicios de emergencia a través de las comunicaciones de emergencia y, en particular, en lo referente a la información de ubicación desde el dispositivo móvil, pues ello conlleva el acceso y la gestión de datos de localización personales muy precisos”, lo que merece una valoración general favorable del mismo por parte de esta Agencia, sin perjuicio de las observaciones que se realizan en el presente informe.*

Otro de los objetivos perseguidos por esta norma es conseguir un acceso igualitario a los servicios de emergencia a través del 112 para las personas con discapacidad, para lo que contiene previsiones para que el acceso a los servicios de emergencia por los usuarios finales con discapacidad esté disponible y sea equivalente al que disfrutaban otros usuarios finales.

## I

Esta Agencia ha tenido ocasión de pronunciarse en numerosas ocasiones en relación con el contenido propio del presente proyecto normativo, respecto del tratamiento de los datos personales con ocasión de las llamadas realizadas a los servicios de emergencia, tanto al informar preceptivamente las sucesivas normas legales y reglamentarias, como al atender a las reiteradas

consultas formuladas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la licitud de la comunicación a los servicios de emergencia de los datos de los abonados al servicio telefónico obrantes en su bases de datos.

En este sentido, y respecto de la aplicación de la normativa general sobre protección de datos personales, nos pronunciamos recientemente en el Informe 46/2021, referente al Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, por el que se procedía a la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2018/172 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, señalando lo siguiente:

La Directiva (UE) 2018/172 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, refunde en un único texto el paquete de Directivas comunitarias aprobadas en el año 2002 y modificadas en el año 2009, que forman parte del marco regulador para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directivas acceso, autorización, marco y servicio universal) con excepción de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), que se mantiene en vigor en tanto no se proceda a la aprobación del conocido como Reglamento Eprivacy.

Por consiguiente, tal y como señala el Considerando 15 de la Directiva (UE) 2018/172 *“El tratamiento de datos personales mediante servicios de comunicaciones electrónicas, contra remuneración o de otro modo, debe ajustarse al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo”*, sin perjuicio de las especificaciones que, como norma especial aplicable a las comunicaciones electrónicas, se contienen en la Directiva 2002/58/CE.

A este respecto, el propio RGPD en su Considerando 173, dispone que *“El presente Reglamento debe aplicarse a todas las cuestiones relativas a la protección de los derechos y las libertades fundamentales en relación con el tratamiento de datos personales que no están sujetas a obligaciones específicas con el mismo objetivo establecidas en la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, incluidas las obligaciones del responsable del tratamiento y los derechos de las personas físicas. Para aclarar la relación entre el presente Reglamento y la Directiva 2002/58/CE, esta última debe ser modificada en consecuencia. Una vez que se adopte el presente Reglamento, debe*

*revisarse la Directiva 2002/58/CE, en particular con objeto de garantizar la coherencia con el presente Reglamento.”*

Y en el artículo 95 se refiere a la relación del RGPD con la Directiva 2002/58/CE, señalando lo siguiente:

*El presente Reglamento no impondrá obligaciones adicionales a las personas físicas o jurídicas en materia de tratamiento en el marco de la prestación de servicios públicos de comunicaciones electrónicas en redes públicas de comunicación de la Unión en ámbitos en los que estén sujetas a obligaciones específicas con el mismo objetivo establecidas en la Directiva 2002/58/CE.*

Por lo tanto, la Directiva 2002/58/CE mantiene, en relación con el RGPD, el carácter de norma especial que tenía con la Directiva 95/46/CE, tal y como se reconoce en su Considerando 10 (*“En el sector de las comunicaciones electrónicas es de aplicación la Directiva 95/46/CE, en particular para todas las cuestiones relativas a la protección de los derechos y las libertades fundamentales que no están cubiertas de forma específica por las disposiciones de la presente Directiva, incluidas las obligaciones del responsable del tratamiento de los datos y los derechos de las personas. La Directiva 95/46/CE se aplica a los servicios de comunicaciones electrónicas que no sean de carácter público.”*), y en su artículo 1, relativo al ámbito de aplicación y objetivo, en el que después de disponer en su apartado 1 que *“La presente Directiva establece la armonización de las disposiciones nacionales necesaria para garantizar un nivel equivalente de protección de las libertades y los derechos fundamentales y, en particular, del derecho a la intimidad y la confidencialidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas, así como la libre circulación de tales datos y de los equipos y servicios de comunicaciones electrónicas en la Comunidad”* añade en su apartado 2 que *“Las disposiciones de la presente Directiva especifican y completan la Directiva 95/46/CE a los efectos mencionados en el apartado 1.”*

Por lo tanto, la Directiva 2002/58/CE y, consecuentemente, los preceptos del presente anteproyecto que transponen dicha Directiva, vienen a configurar un régimen especial, al que se someterían únicamente los tratamientos que la misma regula, frente al régimen general de protección de datos que se recoge en el RGPD. Por este motivo, las disposiciones del mismo serán de aplicación a todos los tratamientos llevados a cabo dentro del ámbito de aplicación del derecho de la Unión y que no estén regulados específicamente por la Directiva, tal y como se desprende del ámbito de aplicación establecido en el artículo 2 del Reglamento y en los términos que especifica su artículo 95. Asimismo, dicho carácter de norma especial es igualmente predicable respecto de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos



Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), cuyas disposiciones deben ser tenidas en cuenta al constituir la “lex generalis” aplicable para garantizar el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Partiendo del citado marco normativo, las cuestiones que procede analizar desde la perspectiva de la protección de los datos personales son las relativas al acceso a la información sobre números de abonado, la identificación de la llamada entrante y la información sobre la localización de los usuarios.

## II

En relación con el acceso a la información sobre el número de abonados, esta Agencia se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, tal y como recuerda el Informe 1/2022:

## III

*Sobre el cumplimiento de la obligación legal de permitir la prestación del servicio de directorio telefónico en condiciones de competencia efectiva y la específica comunicación de datos que la misma conlleva, ya fue objeto de análisis en nuestro informe 35/2020, referido a la primera consulta formulada por la CNMC en relación con las comunicaciones de datos al CIS:*

## II

*Procede, a continuación, analizar la base jurídica en virtud de la cual la CNMC puede proceder al tratamiento de los datos personales de los abonados a los servicios de comunicaciones electrónicas, así como la finalidad específica para la que se recaban y se tratan dichos datos.*

*En este sentido, como viene señalando reiteradamente esta Agencia, la obligación legal de permitir la prestación del servicio de directorio telefónico en condiciones de competencia efectiva y la específica cesión de datos que la misma conlleva, dimana de lo dispuesto en los artículos 25 y 49 de la vigente Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones -LGT-.*

*De tal modo, en relación con el cumplimiento de dicha obligación, el artículo 25.1 c) de la LGT, dentro de la regulación del servicio universal, recuerda que:*

*“Bajo el mencionado concepto de servicio universal se deberá garantizar, en los términos y condiciones que mediante real decreto se determinen por el Gobierno (...) Se ponga a disposición de los abonados al servicio telefónico disponible al público una guía general de números de abonados, ya sea impresa o electrónica, o ambas, que se actualice, como mínimo, una vez al año. Mediante real decreto se determinarán los colectivos de abonados que pueden solicitar que se le entregue la guía impresa. Asimismo, que se ponga a disposición de todos los usuarios finales de dicho servicio, incluidos los usuarios de teléfonos públicos de pago, al menos un servicio de información general sobre números de abonados”, añadiendo que “Todos los abonados al servicio telefónico disponible al público tendrán derecho a figurar en la mencionada guía general, sin perjuicio, en todo caso, del respeto a las normas que regulen la protección de los datos personales y el derecho a la intimidad”.*

*La garantía del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal aparece expresamente reconocida entre los objetivos y principios de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, al establecer dentro de los mismos el artículo 3 j):*

*“Defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas en condiciones adecuadas de elección, precio y buena calidad, promoviendo la capacidad de los usuarios finales para acceder y distribuir la información o utilizar las aplicaciones y los servicios de su elección, en particular a través de un acceso abierto a Internet. En la prestación de estos servicios deben salvaguardarse los imperativos constitucionales de no discriminación, de respeto a los derechos al honor y a la intimidad, la protección a la juventud y a la infancia, la protección de los datos personales y el secreto en las comunicaciones”.*

*En lo referente a la regulación de los directorios telefónicos, el artículo 49.1 de la LGT establece que:*

*“La elaboración y comercialización de las guías de abonados a los servicios de comunicaciones electrónicas y la prestación de los servicios de información sobre ellos se realizará en régimen de libre competencia”.*

*Asimismo, el artículo 48.3 establece que:*

*“Respecto a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las guías de abonados, los usuarios finales de los*

*servicios de comunicaciones electrónicas tendrán los siguientes derechos: a) A figurar en las guías de abonados. b) A ser informados gratuitamente de la inclusión de sus datos en las guías, así como de la finalidad de las mismas, con carácter previo a dicha inclusión. c) A no figurar en las guías o a solicitar la omisión de algunos de sus datos, en la medida en que tales datos sean pertinentes para la finalidad de la guía que haya estipulado su proveedor”.*

*En cuanto al deber de suministro de la información para la prestación en libre competencia de los servicios de edición de directorios telefónicos o realización de consultas telefónicas, añade el propio artículo 49.1 de la Ley 9/2014 que:*

*“A tal efecto, las empresas que asignen números de teléfono a los abonados habrán de dar curso a todas las solicitudes razonables de suministro de información pertinente para la prestación de los servicios de información sobre números de abonados y guías accesibles al público, en un formato aprobado y en unas condiciones equitativas, objetivas, orientadas en función de los costes y no discriminatorias, estando sometido el suministro de la citada información y su posterior utilización a la normativa en materia de protección de datos vigente en cada momento”.*

*Por este motivo, como viene reiterando esta Agencia en diferentes informes jurídicos -por todos, el Nº 0008/2020, de 2 de abril de 2020-, “(...) el legislador viene a concretar expresamente, en una norma con rango de Ley, la posibilidad de que, en un desarrollo reglamentario posterior, se exija a los operadores la aportación de los datos necesarios para dar pleno cumplimiento a los derechos/deberes que él mismo consagra en la propia Ley.”*

*En consecuencia, en el contexto general -al que se refiere el ejercicio de sus competencias- la comunicación de los datos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia encuentra su fundamento en la obligación legal de garantía de la libre competencia en el mercado. Por su parte, la base jurídica legitimadora del tratamiento de los datos así obtenidos por las cesionarias de esta información se incardina en el interés legítimo de estas cuando pretendan prestar el servicio de guía telefónica sobre números de abonado o de información sobre números de abonado en condiciones de libre competencia.*

*Dentro de este marco regulatorio específico, las sucesivas comunicaciones de información con datos de carácter personal se*



*ampararían, en el régimen vigente desde 25 de mayo de 2018, en los apartados c) y f) del artículo 6.1 del dicho Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 -RGPD y deberán ajustarse a las normas reglamentarias que las regulan: el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, la Orden CTE/711/2002, de 26 de marzo, por la que se establecen las condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado y la Circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 1/2013, relativa al procedimiento de suministro de datos de los abonados para la prestación de servicios de guías, consulta telefónica sobre números de abonado y emergencias, modificada por la Circular 5/2014, de 30 de julio.*

*Especialmente, debe tenerse en cuenta lo previsto en el segundo párrafo del artículo 68.2 del Real Decreto 424/2005, que en desarrollo del derecho que tienen los abonados a no figurar en las guías o a solicitar la omisión de algunos de sus datos, previsto como hemos visto en el artículo 48.3 de la LGT, señala que:*

*“Los datos referentes a los abonados que hubieran ejercido su derecho a no figurar en las guías accesibles al público únicamente se proporcionarán a las entidades titulares del servicio de atención de llamadas de emergencia. A estos efectos, se entenderá que los servicios de llamadas de emergencia son los prestados a través del número 112 y aquellos otros que determine la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información”.*

*Por consiguiente, la finalidad primigenia que legitima la comunicación de los datos a la CNMC encuentra su fundamento en la obligación legal de garantía de la libre competencia en el mercado y en el interés legítimo de las operadoras en prestar el servicio de guía telefónica sobre números de abonado o de información sobre números de abonado en condiciones de libre competencia.*

*El régimen regulador de la protección de datos en relación con las guías de abonados al servicio de comunicaciones electrónicas aparece recogido por el artículo 12 de la Directiva 2002/58/CE, en que se establece lo siguiente:*

*“1. Los Estados miembros velarán por que se informe gratuitamente a los abonados antes de ser incluidos en las guías acerca de los fines de las guías de abonados, impresas o electrónicas, disponibles al público o accesibles a través de servicios de información sobre las mismas, en las que puedan incluirse sus datos personales, así como de cualquier otra posibilidad de uso basada en funciones de búsqueda incorporadas en las versiones electrónicas de la guía.*

*2. Los Estados miembros velarán por que los abonados tengan oportunidad de decidir si sus datos personales figuran en una guía pública, y en su caso cuáles de ellos, en la medida en que tales datos sean pertinentes para la finalidad de la guía que haya estipulado su proveedor, y de comprobar, corregir o suprimir tales datos. La no inclusión en una guía pública de abonados, así como la comprobación, corrección o supresión de datos personales de una guía, no deberán dar lugar al cobro de cantidad alguna.*

*3. Los Estados miembros podrán exigir que para cualquier finalidad de una guía pública distinta de la búsqueda de datos de contacto de personas a partir de su nombre y, si resulta necesario, de un mínimo de otros identificadores, se recabe el consentimiento específico de los abonados.*

*4. Los apartados 1 y 2 se aplicarán a los abonados que sean personas físicas. Los Estados miembros velarán asimismo, en el marco del Derecho comunitario y de las legislaciones nacionales aplicables, por la suficiente protección de los intereses legítimos de los abonados que no sean personas físicas en lo que se refiere a su inclusión en guías públicas.”*

*Consecuentemente, al objeto de conciliar la libre competencia en el mercado con el derecho a la protección de datos personales de los abonados, la ley incluye en el artículo 48.3 las garantías específicas que aseguren su debida protección en los términos previstos en la citada Directiva 2002/58/CE, entre las que se incluye el derecho a “no figurar en las guías o a solicitar la omisión de algunos de sus datos, en la medida en que tales datos sean pertinentes para la finalidad de la guía que haya estipulado su proveedor”.*

*Asimismo, el marco normativo se completa con las previsiones de los artículos 67 y 68 del Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, diferenciando claramente las materias relacionadas con el reconocimiento de los derechos de los usuarios en*

*relación con la protección de sus datos de carácter personal en las guías de abonados de las cuestiones referidas a la prestación del propio servicio, apareciendo las primeras en el artículo 67 y las segundas en el artículo 68.*

*En cuanto a la comunicación de los datos de los abonados a los servicios de emergencia, en los sucesivos informes emitidos por esta Agencia (como el Informe 186/2018 o el Informe 9/2020) se viene destacando cómo, en estos supuestos,*

*“la necesaria protección de intereses vitales del interesado o de otra persona física se constituye en la base legítima para la cesión de los datos con información de carácter personal. Por ello, las sucesivas comunicaciones se ampararían, en el régimen vigente desde 25 de mayo de 2018, en el apartado d) del artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos”.*

*De este modo, dicha comunicación se articula como un presupuesto necesario para la correcta gestión de la emergencia, que debe ponerse en relación con la obligación de identificar la llamada entrante establecida en el artículo 3.3. del Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, que regula el acceso mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112:*

*“(…) Asimismo, dichos operadores facilitarán la identificación automática de la línea o zona geográfica desde donde se efectúen las llamadas al número telefónico 112, dentro de las posibilidades técnicas de la red y de acuerdo con la regulación que sobre las facilidades de presentación y limitación de la línea llamante se establezcan en la normativa nacional y comunitaria para salvaguardar la seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública y la prevención, investigación y persecución de delitos, la seguridad de la vida humana o razones de interés público.*

*En todo caso, lo establecido en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las medidas que se adopten para garantizar el secreto de las comunicaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.3 de la Constitución, y la protección de los datos personales, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, y en sus normas de desarrollo y disposiciones complementarias”.*

Los criterios mantenidos en los citados informes son igualmente aplicables tras la entrada en vigor de la reciente Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, que en su artículo 72.2, al regular las guías de abonados y servicios de información sobre números de abonado, establece tanto la obligación de los operadores de servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración que asignan números de teléfono a partir de un plan de numeración de dar curso a todas las solicitudes razonables de suministro de información pertinente para la prestación de los servicios de información sobre números de abonados y guías accesibles al público, así como la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de suministrar gratuitamente los datos que le faciliten los citados operadores a las entidades que presten los servicios de llamadas de emergencia de conformidad con el artículo 74, de conformidad con las condiciones que se establezcan mediante real decreto y de acuerdo con el procedimiento para el suministro y recepción de la información que, en su caso, pueda fijar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia mediante circular. Asimismo, dicha regulación debe ponerse en relación con el artículo 65.1.o), que después de reconocer el derecho de los usuarios finales a impedir la identificación de su línea lo excluye cuando se trate de comunicaciones de emergencia a través del número de emergencia 112 o comunicaciones efectuadas a entidades que presten servicios de emergencia que se determinen mediante real decreto.

En desarrollo de dicho precepto, el artículo 7 del proyecto regula la forma en la que se procederá al suministro de dicha información, que incluirá, tal y como se recogía en la normativa anterior, los números de aquellos abonados que hubieran ejercido el derecho a no figurar en las guías o a solicitar la omisión de algunos de sus datos, actualmente recogido en el artículo 66. 3. c) de la vigente Ley General de Telecomunicaciones.

Asimismo, además de una remisión genérica a la normativa sobre protección de datos personales, se recogen previsiones específicas dirigidas a garantizar el cumplimiento de los principios de protección de datos, singularmente los principios de exactitud y limitación de la finalidad, lo que se valora positivamente.

**No obstante, en relación con el principio de minimización, debería modificarse el apartado 4, referido a los datos que deben suministrarse, y que en su redacción actual establece una lista de mínimos, de modo que se establezca una lista taxativa de aquellos datos que deben suministrarse atendiendo a la finalidad específica de una prestación adecuada de los servicios de atención de emergencias.**

Directamente relacionado con lo anterior se encuentra la regulación contenida en el artículo 11 del proyecto referida a la obligación de los operadores de facilitar la identificación de la línea de origen desde donde se

efectúen las llamadas al número único europeo de emergencias 112 , incluidos los que hayan ejercido su derecho a impedir la identificación de su línea conforme al artículo 65.1.o) de la LGTel (apartado 5) y de proporcionar la información sobre números de abonado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, incluidos los de aquellos abonados que hubieran ejercido el derecho contemplado en el artículo 66.3.c de la LGTel (apartado 6), quedando amparado el tratamiento de datos personales en el cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en la citada Ley (artículo 74 y, por referencia al mismo, el artículo 72) y en la protección de intereses vitales del afectado (apartado 7), el cual incluye, asimismo, una remisión específica a la normativa sobre protección de datos personales (apartado 9) completada con las garantías específicas del artículo 74 de la LGTel y el artículo 7 del proyecto.

#### **IV**

En cuanto a la obligación de los operadores de facilitar la localización de los usuarios, su legitimación viene determinada, igualmente, por el cumplimiento de obligaciones legales en relación con la protección de intereses vitales, conforme a los apartados c) y d) del artículo 6.1. del RGPD recogiendo los párrafos segundo a cuarto del apartado 2 del artículo 74 de la LGTel las siguientes previsiones:

*Asimismo, los operadores citados pondrán a disposición de las autoridades receptoras de dichas comunicaciones de emergencia la información que mediante real decreto se determine relativa a la ubicación de las personas que efectúan la comunicación de emergencia, inmediatamente después del establecimiento de dicha comunicación. La generación y transmisión de la información relativa a la localización del llamante es gratuita tanto para el llamante como para las autoridades receptoras de dichas comunicaciones de emergencia cuando se utilice el número de emergencia 112 u otros números de emergencia que se determinen.*

*Mediante real decreto se establecerán criterios para la precisión y la fiabilidad de la información facilitada sobre la ubicación de las personas que efectúan comunicaciones de emergencia a los servicios de emergencia.*

*La información relativa a la ubicación de las personas que efectúan la comunicación de emergencia únicamente podrá ser utilizada con la finalidad de facilitar la localización del llamante en relación con la concreta llamada de emergencia realizada.*

Tal y como se ha señalado al principio del presente informe, uno de los principales objetivos del proyecto de Real Decreto es el de incorporar como forma de localización la facilidad AML, respecto de la cual ya se pronunció favorablemente esta Agencia en su informe 39/2019, reiterado posteriormente



en el Informe 46/2021, ya citado, referido al Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones:

## VII

*Por otro lado, debe hacerse referencia a la obligación de los operadores de poner a disposición de las autoridades receptoras de las comunicaciones de emergencia de la información relativa a la ubicación de las personas que efectúan dicha comunicación que se establece en el artículo 74.2 del anteproyecto:*

*2. Los operadores de servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración, cuando dichos servicios permitan realizar llamadas a un número de un plan de numeración nacional o internacional, tienen la obligación de encaminar gratuitamente las comunicaciones de emergencia a los servicios de emergencia cuando se utilice el número de emergencia 112 u otros números de emergencia que se determinen.*

*Asimismo, los operadores citados pondrán a disposición de las autoridades receptoras de dichas comunicaciones de emergencia la información que mediante real decreto se determine relativa a la ubicación de las personas que efectúan la comunicación de emergencia, inmediatamente después del establecimiento de dicha comunicación. El establecimiento y la transmisión de la información relativa a la localización del llamante es gratuita tanto para el llamante como para las autoridades receptoras de dichas comunicaciones de emergencia cuando se utilice el número de emergencia 112 u otros números de emergencia que se determinen.*

*Mediante real decreto se establecerán criterios para la precisión y la fiabilidad de la información facilitada sobre la ubicación de las personas que efectúan comunicaciones de emergencia a los servicios de emergencia.*

*En este punto, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 109.6 de la Directiva 2018/1972, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre, por la que se establece el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas:*

*6. Los Estados miembros velarán por que la información relativa a la ubicación de las personas que efectúan llamadas se ponga a disposición del PSAP más indicado inmediatamente tras el establecimiento de la comunicación de emergencia. Dicha información incluye los datos sobre ubicación de la red y, si están*

*disponibles, los datos relativos a la localización del llamante procedentes del dispositivo móvil. Los Estados miembros garantizarán que el establecimiento y la transmisión de la información relativa a la localización del llamante sea gratuita para este último y para el PSAP con respecto a todas las comunicaciones de emergencia al número único europeo de emergencia «112». Los Estados miembros podrán ampliar el ámbito de dicha obligación de modo que abarque las comunicaciones de emergencia a números nacionales de emergencia. Las autoridades de reglamentación competentes, en caso necesario previa consulta al ORECE, establecerán criterios para la precisión y la fiabilidad de la información facilitada sobre la localización del llamante.*

*Respecto de la importancia de disponer de los datos de localización procedentes del terminal del afectado cuando se efectúan llamadas a los servicios de emergencia se pone de manifiesto en el Considerando 290 de dicha Directiva:*

*“La información sobre la localización del llamante, aplicable a todas las comunicaciones de emergencia, mejora el nivel de protección y seguridad de los usuarios finales y facilita a los servicios de emergencia el ejercicio de sus funciones, siempre que la transferencia a los servicios de emergencia correspondientes de la comunicación de emergencia y de los datos asociados esté garantizada por el sistema nacional de PSAP. La recepción y el uso de esta información sobre la localización del llamante, que incluye tanto la información relativa a la ubicación basada en redes como, cuando se disponga de ella, la información relativa a la ubicación basada en el terminal del llamante, debe ajustarse al Derecho de la Unión aplicable sobre el tratamiento de datos personales y medidas de seguridad. Las empresas que aportan la localización basándose en la red deben poner la información sobre la localización del llamante a disposición de los servicios de emergencia tan pronto como la llamada llegue a ese servicio, independientemente de la tecnología utilizada.*

*No obstante, las tecnologías de localización basadas en el terminal se han demostrado bastante más exactas y rentables debido a la disponibilidad de datos facilitados por el sistema europeo de navegación por complemento geoestacionario, el sistema de satélite Galileo y otros sistemas mundiales de navegación por satélite y datos wifi. Por lo tanto, la información sobre la localización del llamante obtenida del terminal debe complementar la información de localización basada en la red,*

*incluso en caso de que solo se disponga de ella después de establecida la comunicación de emergencia. Los Estados miembros deben velar por que, siempre que sea posible, la localización del llamante obtenida del terminal se ponga a disposición del PSAP más apropiado. Puede que esto no sea posible en algunos casos, por ejemplo cuando la localización no esté disponible en el terminal o a través del servicio de comunicaciones interpersonales empleado, o cuando no es factible técnicamente obtener esta información. Además, los Estados miembros deben garantizar que los PSAP sean capaces de recuperar y gestionar la información disponible sobre la localización del llamante, siempre que resulte factible. El establecimiento y la transmisión de dicha información deben ser gratuitos tanto para el usuario final como para la autoridad encargada de tramitar la comunicación de emergencia, independientemente de cuáles sean los medios de establecimiento (por ejemplo, mediante el terminal o la red) o de transmisión (por ejemplo, a través de un canal de voz, SMS o IP)”.*

*Esta Agencia ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto de dicha cuestión en nuestro Informe 39/2019, respecto de la consulta formulada por el Director General de Protección Civil relativa a cuál sería la base jurídica que determine la licitud del tratamiento de los datos de localización del llamante por teléfono móvil a los servicios de emergencia mediante el empleo de AML (Advance Mobile Location), en la que se señalaba lo siguiente:*

*Tal y como se describe en la misma, AML es un mecanismo, ya desplegado en algunos países, por el que los centros de atención a llamadas de emergencia (servicios 112 y similares, conocidos como PSAP por su siglas en inglés) pueden recibir de forma automática información sobre la ubicación del llamante (cuando éste llama desde un teléfono móvil) con una precisión muy superior a la que puede obtenerse actualmente a través de la información que proporcionan los operadores de telefonía móvil, basada en la ubicación de la estación base desde la que se origina la llamada.*

*AML es independiente del operador, ya que funciona sobre el teléfono móvil (directamente desde el sistema operativo, por lo que no requiere que el usuario descargue una app o realice una configuración previa). Cuando detecta que se está produciendo una llamada a un número de emergencias, AML activa la ubicación del móvil en alta precisión (típicamente obtenida a partir*

*de redes WIFI o Bluetooth cercanas, o de un servicio GNSS, como GPS o Galileo) y genera un mensaje con las coordenadas de la ubicación. El mensaje (que puede ser un SMS, un mensaje de datos, o ambos) es enviado a un número y/o una URL predefinidos para cada país. El servicio se puede configurar para que el mensaje sea reenviado cada cierto tiempo mientras la llamada de voz siga activa.*

*Asimismo, en la consulta se manifiesta que los PSAP en los países donde ya se ha producido el despliegue de AML son unánimes en constatar la mejora que supone para la actuación de los servicios de emergencia, ya que les permite disponer de información mucho más precisa sobre el punto al que deben dirigirse y que en España, los servicios 112, gestionados por las Comunidades Autónomas, son conscientes de estas mejoras y han reclamado repetidas veces que se active el despliegue de AML en nuestro país. Por su parte, la Asociación Europea de Números de Emergencia (EENA, por sus siglas en inglés) fomenta y apoya el despliegue de este sistema y difunde información sobre la tecnología que puede consultarse en su página web <https://eena.org/aml/>.*

*Por otro lado, se indica que el pasado 17 de diciembre de 2018 se publicó en el DOUE la Directiva 2018/1972, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre, por la que se establece el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (EECC, por sus siglas en inglés), que establece en su artículo 109.6 que:*

*Los Estados Miembros velarán por que la información relativa a la ubicación de las personas que efectúan llamadas se ponga a disposición del PSAP más indicado inmediatamente tras el establecimiento de la comunicación de emergencia. Dicha información incluye los datos sobre ubicación de la red y, si están disponibles, los datos relativos a la localización del llamante procedentes del dispositivo móvil. Los Estados miembros garantizarán que el establecimiento y la transmisión de la información relativa a la localización del llamante sea gratuita para este último y para el PSAP con respecto a todas las comunicaciones de emergencia al número único europeo de emergencia «112» [...]*

*Por lo que, además del interés y la conveniencia de desplegar el AML por las mejoras que supone en la respuesta a emergencias, existe ahora un imperativo legal para realizar este despliegue en*

*un plazo menor de dos años, a cuyo efecto la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Protección Civil ha constituido un Grupo de Trabajo con el objetivo de llevar a cabo las acciones necesarias para desplegar el sistema AML en España.*

*[...]*

### *III*

*Partiendo de lo anterior y, tal y como se indica en la consulta y en la página web de EENA, la ventaja esencial que aporta un teléfono inteligente con AML es que reconoce cuándo se realiza una llamada de emergencia y, si aún no está activado, activa el GNSS del teléfono para recopilar la información de ubicación de la persona que llama. Luego, el teléfono envía un SMS automático a los servicios de emergencia con la ubicación de la persona que llama, antes de apagar el GNSS nuevamente. El servicio también puede usar Wi-Fi, según cuál sea mejor en un momento dado.*

*Por lo tanto, dicho sistemas es mucho más preciso que el empleado en la actualidad, en el que para determinar la ubicación desde la que se realiza la llamada es necesario realizar una búsqueda sobre la red de telefonía que da servicio al llamante, estableciendo únicamente una ubicación aproximada sobre la base de las antenas que están cursando la llamada. Sin embargo, con el mecanismo AML, según EENA, el sistema es 4.000 veces más preciso que la localización GSM tradicional, con un total del 85% de las llamadas localizadas dentro de un radio de menos de 50 metros, mientras que con la localización mediante la red móvil, el radio puede tener varios kilómetros.*

*En este sentido, el Dictamen 13/2011 del Grupo del Artículo 29 sobre los servicios de geolocalización en los dispositivos móviles inteligentes ya indicaba que el método de posicionamiento mediante datos de estaciones bases “da una idea rápida y general de la ubicación, pero no es muy preciso en comparación con los datos GPS y Wifi. La precisión es de aproximadamente 50 metros en las zonas urbanas densamente pobladas y de hasta varios kilómetros en las zonas rurales”, mientras que la tecnología GPS “ofrece un posicionamiento exacto, de entre 4 y 15 metros”.*

*De ahí que varios países hayan implementado ya esta tecnología (según la página web de EENA, a fecha de junio de 2019 lo tendrían implementado Austria, Bélgica, Estonia, Finlandia,*



*Islandia, Irlanda, Lituania, Moldavia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos) y las autoridades europeas promuevan el empleo de la misma, tal y como se recoge en el artículo 109.6 de la Directiva 2018/1972, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre, por la que se establece el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (ya transcrito) y se fundamenta en su Considerando 290:*

*“La información sobre la localización del llamante, aplicable a todas las comunicaciones de emergencia, mejora el nivel de protección y seguridad de los usuarios finales y facilita a los servicios de emergencia el ejercicio de sus funciones, siempre que la transferencia a los servicios de emergencia correspondientes de la comunicación de emergencia y de los datos asociados esté garantizada por el sistema nacional de PSAP. La recepción y el uso de esta información sobre la localización del llamante, que incluye tanto la información relativa a la ubicación basada en redes como, cuando se disponga de ella, la información relativa a la ubicación basada en el terminal del llamante, debe ajustarse al Derecho de la Unión aplicable sobre el tratamiento de datos personales y medidas de seguridad. Las empresas que aportan la localización basándose en la red deben poner la información sobre la localización del llamante a disposición de los servicios de emergencia tan pronto como la llamada llegue a ese servicio, independientemente de la tecnología utilizada.*

*No obstante, las tecnologías de localización basadas en el terminal se han demostrado bastante más exactas y rentables debido a la disponibilidad de datos facilitados por el sistema europeo de navegación por complemento geoestacionario, el sistema de satélite Galileo y otros sistemas mundiales de navegación por satélite y datos wifi. Por lo tanto, la información sobre la localización del llamante obtenida del terminal debe complementar la información de localización basada en la red, incluso en caso de que solo se disponga de ella después de establecida la comunicación de emergencia. Los Estados miembros deben velar por que, siempre que sea posible, la localización del llamante obtenida del terminal se ponga a disposición del PSAP más apropiado. Puede que esto no sea posible en algunos casos, por ejemplo cuando la localización no esté disponible en el terminal o a través del servicio de comunicaciones interpersonales empleado, o cuando no es factible técnicamente obtener esta información. Además, los Estados miembros deben garantizar que los PSAP sean capaces*

*de recuperar y gestionar la información disponible sobre la localización del llamante, siempre que resulte factible. El establecimiento y la transmisión de dicha información deben ser gratuitos tanto para el usuario final como para la autoridad encargada de tramitar la comunicación de emergencia, independientemente de cuáles sean los medios de establecimiento (por ejemplo, mediante el terminal o la red) o de transmisión (por ejemplo, a través de un canal de voz, SMS o IP)”.*

*Por tanto, el tratamiento del dato de localización se encontraría amparado en la letra d) del artículo 6.1. del RGPD: el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física, independientemente de quién realice dicho tratamiento, ya que en este caso el factor determinante de la licitud del tratamiento es la protección de un interés esencial para la vida, tal y como destaca el Considerando 46:*

*“El tratamiento de datos personales también debe considerarse lícito cuando sea necesario para proteger un interés esencial para la vida del interesado o la de otra persona física. En principio, los datos personales únicamente deben tratarse sobre la base del interés vital de otra persona física cuando el tratamiento no pueda basarse manifiestamente en una base jurídica diferente. Ciertos tipos de tratamiento pueden responder tanto a motivos importantes de interés público como a los intereses vitales del interesado, como por ejemplo cuando el tratamiento es necesario para fines humanitarios, incluido el control de epidemias y su propagación, o en situaciones de emergencia humanitaria, sobre todo en caso de catástrofes naturales o de origen humano”.*

*En este sentido se he venido pronunciando esta Agencia en relación con los servicios prestados a través del 112, atendiendo a la necesaria protección de intereses vitales, sin que la nueva regulación contenida en el RGPD suponga, en este punto, novedad alguna respecto al régimen anterior. Así, en el Informe 438/2015 se realizaba un análisis detallado de la cuestión que por su importancia se transcribe a continuación:*

*[...]*

*Igualmente, esta Agencia viene fundamentando, reiteradamente, en la necesaria protección de intereses vitales del interesado o de otra persona física, las comunicaciones a las entidades*

*municipales por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de los datos de los abonados al servicio telefónico para la prestación del servicio sobre números de abonado en el marco de las llamadas de emergencia, siendo el más reciente el Informe 186/2018:*

*[...]*

*Por consiguiente, tal y como se ha expuesto en el apartado anterior, el tratamiento del dato de localización en las llamadas a los servicios de emergencia mediante el mecanismo AML sería lícito al amparo de lo previsto en la letra d) del artículo 6.1. del RGPD y en los términos que puedan establecerse en la normativa que transponga al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, normativa que deberá ajustarse al resto de principios recogidos en el RGPD y que deberá ser objeto del preceptivo dictamen por la Agencia Española de Protección de Datos.*

*Todo ello sin perjuicio de que, atendiendo a los concretos términos en que se proceda a dicha transposición y, en el caso de que dicha normativa tenga rango de ley, el tratamiento pueda encontrar también su fundamento en el artículo 6.1 del RGPD, letra c (el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento) y e (el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento).*

*A este respecto, el anteproyecto remitido no contiene disposición alguna respecto al uso de sistemas que permitan utilizar la información del terminal del afectado, incluso en los supuestos en los que no haya prestado su consentimiento, para facilitar su localización cuando se efectúan llamadas a los servicios de emergencia, limitándose el apartado 2 del artículo 74 a remitirse a un futuro desarrollo reglamentario que establecerá “criterios para la precisión y la fiabilidad de la información facilitada sobre la ubicación de las personas que efectúan comunicaciones de emergencia a los servicios de emergencia”.*

*Dicha remisión es insuficiente para amparar dichos tratamientos de datos personales en el cumplimiento de una obligación legal, ya que el artículo 8 de la LOPDGDD es claro al señalar que*

*“1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de*

*Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.”*

*La exigencia de una norma con rango de ley deriva directamente de lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución y en la doctrina constitucional relativa a la limitación de los derechos fundamentales. En este sentido, el Tribunal Constitucional, en su STC 76/2019, de 22 de mayo, tras citar, entre otras, a su anterior STC 292/2000, de 30 de noviembre, señala:*

*- En segundo lugar, por mandato expreso de la Constitución, toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas ora incida directamente sobre su desarrollo (art. 81.1 CE), ora limite o condicione su ejercicio (art. 53.1 CE), precisa una habilitación legal (por todas, STC 49/1999, de 5 de abril, FJ 4). En la STC 49/1999, FJ 4, definimos la función constitucional de esa reserva de ley en los siguientes términos:*

*Esa reserva de ley a que, con carácter general, somete la Constitución española la regulación de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en su Título I, desempeña una doble función, a saber: de una parte, asegura que los derechos que la Constitución atribuye a los ciudadanos no se vean afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes; y, de otra, en un Ordenamiento jurídico como el nuestro en el que los Jueces y Magistrados se hallan sometidos “únicamente al imperio de la Ley” y no existe, en puridad, la vinculación al precedente (SSTC 8/1981, 34/1995, 47/1995 y 96/1996) constituye, en definitiva, el único modo efectivo de garantizar las exigencias de seguridad jurídica en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Por eso, en lo que a nuestro Ordenamiento se refiere, hemos caracterizado la seguridad jurídica como una suma de legalidad y certeza del Derecho (STC 27/1981, fundamento jurídico 10).”*

*Esta doble función de la reserva de ley se traduce en una doble exigencia: por un lado, la necesaria intervención de la ley para habilitar la injerencia; y, por otro lado, esa norma legal “ha de reunir todas aquellas características indispensables como garantía de la seguridad jurídica”, esto es, “ha de expresar todos*

*y cada uno de los presupuestos y condiciones de la intervención” (STC 49/1999, FJ 4). En otras palabras, “no sólo excluye apoderamientos a favor de las normas reglamentarias [...], sino que también implica otras exigencias respecto al contenido de la Ley que establece tales límites” (STC 292/2000, FJ 15).*

*Además, dicha ley deberá respetar en todo caso el principio de proporcionalidad, tal y como recuerda la Sentencia del Tribunal Constitucional 14/2003, de 28 de enero:*

*“En otras palabras, de conformidad con una reiterada doctrina de este Tribunal, la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí importan basta con recordar que, para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si la medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto; SSTC 66/1995, de 8 de mayo [ RTC 1995, 66] , F. 5; 55/1996, de 28 de marzo [ RTC 1996, 55] , FF. 7, 8 y 9; 270/1996, de 16 de diciembre [ RTC 1996, 270] , F. 4.e; 37/1998, de 17 de febrero [ RTC 1998, 37] , F. 8; 186/2000, de 10 de julio [ RTC 2000, 186] , F. 6).”*

*La misma doctrina sostiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Así, si el art. 8 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales reconoce el derecho de toda persona a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan, el art. 52.1 reconoce que ese derecho no es ilimitado y permite la limitación del ejercicio de esos derechos y libertades reconocidos por la Carta, limitación que deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de los mismos.*

*La STJUE de 6 de octubre de 2020, en los casos acumulados C-511/18, C-512/18 y C-520/18, La Quadrature du Net y otros, en su apartado 175, recuerda que:*

*En cuanto a la justificación de dicha injerencia, cabe precisar que el requisito, previsto en el artículo 52, apartado 1, de la Carta, de que cualquier limitación del ejercicio de los derechos*



*fundamentales deba ser establecida por ley implica que la base legal que la permita debe definir ella misma el alcance de la limitación del ejercicio del derecho de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, Facebook Ireland y Schrems, C-311/18, EU:C:2020:559, apartado 175 y jurisprudencia citada).*

*Igualmente, el apartado 65 de la Sentencia (STJUE) de la misma fecha 6 de octubre de 2020 (C-623/17), Privacy International contra Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs y otros, con cita, como la anterior, de la sentencia Schrems 2, dice:*

*65 Cabe añadir que el requisito de que cualquier limitación del ejercicio de los derechos fundamentales deba ser establecida por ley implica que la base legal que permita la injerencia en dichos derechos debe definir ella misma el alcance de la limitación del ejercicio del derecho de que se trate (sentencia de 16 de julio de 2020, Facebook Ireland y Schrems, C-311/18, EU:C:2020:559, apartado 175 y jurisprudencia citada).*

*En definitiva, el apartado 175 de la STJUE de 16 de julio de 2020, C-311/2020, Schrems 2, dice: Cabe añadir, sobre este último aspecto, que el requisito de que cualquier limitación del ejercicio de los derechos fundamentales deba ser establecida por ley implica que la base legal que permita la injerencia en dichos derechos debe definir ella misma el alcance de la limitación del ejercicio del derecho de que se trate [dictamen 1/15 (Acuerdo PNR UE-Canadá), de 26 de julio de 2017, EU:C:2017:592, apartado 139 y jurisprudencia citada].*

*Es pues, la misma ley que establece la injerencia en el derecho fundamental la que ha de determinar las condiciones y garantías, esto es, el alcance y la limitación, que han de observarse en dichos tratamientos,*

*Y en dicha STJUE de 16 de julio de 2020, Schrems 2, se añade (y se reitera posteriormente en las citadas sentencias de 6 de octubre de 2020):*

*176 Finalmente, para cumplir el requisito de proporcionalidad según el cual las excepciones a la protección de los datos personales y las limitaciones de esa protección no deben exceder de lo estrictamente necesario, la normativa controvertida que conlleve la injerencia debe establecer reglas claras y precisas que regulen el alcance y la aplicación de la medida en cuestión e impongan unas exigencias mínimas, de modo que las personas cuyos datos se hayan transferido dispongan de garantías*

*suficientes que permitan proteger de manera eficaz sus datos de carácter personal contra los riesgos de abuso. En particular, dicha normativa deberá indicar en qué circunstancias y con arreglo a qué requisitos puede adoptarse una medida que contemple el tratamiento de tales datos, garantizando así que la injerencia se limite a lo estrictamente necesario. La necesidad de disponer de tales garantías reviste especial importancia cuando los datos personales se someten a un tratamiento automatizado [véase, en este sentido, el dictamen 1/15 (Acuerdo PNR UE-Canadá), de 26 de julio de 2017, EU:C:2017:592, apartados 140 y 141 y jurisprudencia citada).*

*Partiendo de lo anterior, si se pretende habilitar el empleo de tecnologías como el sistema AML al objeto de facilitar la localización de los llamantes a los servicios de emergencia, debería recogerse en el apartado 2 del artículo 74 del anteproyecto la posibilidad de que, para facilitar la precisión de la ubicación, puedan utilizarse los datos procedentes del terminal del afectado, incluso en el supuesto de que para ello fuera necesario la activación automática de los servicios que permitan la ubicación del móvil en alta precisión, recogiendo asimismo el texto legal las garantías oportunas, como pueda ser la relativa a los tipos de datos que pueden tratarse, la limitación de la finalidad de su uso a los efectos de facilitar la localización del llamante en relación con la concreta llamada de emergencia, no admitiéndose su uso para una finalidad distinta, o el plazo de conservación de dichos datos, teniendo en cuenta los criterios que puedan facilitarse por la Dirección General de Protección Civil.*

En virtud del citado informe, si bien se mantuvo la remisión reglamentaria para la identificación de las posibles técnicas de localización sin incluir la referencia expresa al sistema AML, en el texto definitivo de la LGTel se introdujo un último párrafo para recoger una de las garantías fundamentales identificadas por esta Agencia, impidiendo el tratamiento de los datos de localización para una finalidad distinta a la atención de la propia emergencia.

Partiendo de dicha regulación, el artículo 12 del proyecto desarrolla la obligación de los operadores de proporcionar información sobre la localización de los usuarios que llamen al número único europeo de emergencia 112, incluyendo otras garantías específicas en relación con la funcionalidad AML en su apartado 4:

4. Respecto al tratamiento de datos personales derivados de la información de localización procedente del dispositivo móvil obtenida mediante la funcionalidad AML, se establecen las siguientes cautelas adicionales:

- a) Dar cumplimiento al principio de limitación de finalidad, de forma que los datos de localización se utilicen exclusivamente para facilitar la localización del llamante en relación con la concreta llamada de emergencia realizada.
- b) Dar cumplimiento al principio de minimización de los datos a tratar, de forma que no se recopilen datos adicionales a los estrictamente relativos a la localización del usuario final llamante.
- c) Cumplir con el deber de confidencialidad por parte de las personas que accedan a los datos.
- d) La información de localización se suprimirá lo antes posible y, en todo caso, en el plazo de un mes.

Esta Agencia valora positivamente la introducción de dichas garantías, que refuerzan la protección del derecho fundamental a la protección de datos personales, si bien considera que hubiera sido conveniente su inclusión en el propio texto de la ley.

## **V**

Por último, la disposición adicional primera regula las comunicaciones de emergencias a través de otros números telefónicos distintos al 112, desarrollando la previsión contenida en el artículo 74.1. de la LGTel *in fine*, identificando directamente los números existentes en la actualidad, sin perjuicio de la posibilidad de identificación futura de otras por resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, recogiendo las facultades relativas a la información sobre los números de abonado, la información de localización de la persona llamante y la identificación de la línea de origen en términos análogos a los ya analizados, limitando la información sobre localización a la información procedente de la red.